Imprimir

El debate de moción de censura que se dio en el senado de la República en la tarde-noche del 5 de noviembre de 2019, contra el ladino ministro de la Defensa, Guillermo Botero, dejó varios asuntos sobre la mesa que, al mirarse en su conjunto, exponen con claridad que hay una parte del país que habla de paz y está empecinada en consolidarla, mientras otra, en particular los militares y la bancada del Centro Democrático (CD), están interesados en extender la guerra[1], aferrados al principio del enemigo interno[2], históricamente asociado y aplicado a lideresas y líderes sociales, defensores del ambiente y de los derechos humanos, sindicalistas, profesores y académicos críticos de los gobiernos y del establecimiento; y por supuesto, las comunidades afros, indígenas y campesinas que por años se vieron obligadas a compartir el territorio con actores armados ilegales, en particular con las guerrillas de las Farc y el ELN. Todas estas comunidades y pueblos señalados de ser "auxiliadores y simpatizantes con ideas de izquierda" y cercanos al proceder de los subversivos.
El primero de esos asuntos que dejó el debate del 5 de noviembre tiene que ver con la aplicación de ese principio, propio de las dictaduras militares, que indica que "*no basta con matar a la perra (comunismo), sino que hay que matar a sus crías*". Esa terrible sentencia se aplicó en las dictaduras del Cono Sur y en Colombia, para justificar la muerte de militantes de izquierda y extender el delito político a mujeres embarazadas que iban a "traer al mundo izquierdistas"[3], revoltosos o guerrilleros. Criaturas que fueron arrebatadas de los brazos de las madres (militantes de izquierda) para que fueran criadas en "ambientes sanos", es decir, en familias de militantes de derecha o de defensores del régimen (familias de militares).

El senador Roy Barreras, en su intervención, informó lo que el universo castrense de Colombia calló: el asesinato de por lo menos 7 menores de edad (niñas y niños), bombardeados por el Ejército en una operación que en su momento celebró el presidente Duque[4]. Descrito los hechos por el operador político del Valle del Cauca, el país político y mediático entendió que lo acaecido en un campamento, al parecer de las disidencias de las antiguas Farc, ubicado en San Vicente del Caguán, no solo es de extrema gravedad por tratarse de crímenes de lesa humanidad contra menores de edad, sino por el mutismo que guardaron los militares ante semejante resultado operacional que pone en entredicho la inteligencia militar que debió dar cuenta de la presencia de los menores y el talante de

quienes hoy hacen parte de la cúpula militar y tomaron la decisión de bombardear el campamento.

De inmediato las reacciones en medios masivos y en las redes sociales no se hicieron esperar. Como era de esperarse, unas a favor y otras en contra. La defensa del senador Uribe no se hizo esperar. Lo dicho por el *sub júdice* congresista lo recogió El Espectador en un titular: *"Si hay unos niños en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?": Uribe[5]*.

En esa misma lógica, dado el crecimiento del narcotráfico en Colombia en la época en la que él fungió como Director de la Aerocivil, uno podría suponer que…

Lo expresado por el expresidente de la República (2002-2010) deviene profundamente anclado al principio al que se hace referencia en líneas atrás de esta columna y que bien se puede traducir de esta manera: si asesinamos al "guerrillerito", nos ahorramos años de lucha. No importa que sean menores de edad, reclutados de manera forzada por quienes hoy lideran las disidencias farianas. O para el lenguaje propio del uribismo, "esos muchachos no estaban cogiendo café".

El segundo asunto que dejó el acalorado debate conducente a provocar la renuncia de Guillermo Botero y de esa forma "estrenar", por fin, la figura de la Moción de Censura, tiene que ver con la imagen del Ministro de la Defensa. Todo indica que el ícono del ministro civil que asume la cartera de la defensa para garantizar, entre otras cosas, transparencia en los ascensos de los altos mandos, se debilitó por cuenta del desconocimiento que Botero demostró de las lógicas y las racionalidades que circundan al cuerpo castrense.

Hay dos caminos que bien pueden explicar la mala imagen del actual ministro de la Defensa y su incapacidad para transmitir seguridad y ganarse la confianza de los civiles frente al actuar de los militares a su cargo: el primer camino tiene que ver con la posibilidad de que la cúpula militar, en cabeza del general Nicacio Martínez, haya usado al ministro Botero para esconder, detrás de su carácter pusilánime y su ignorancia de los asuntos castrenses, no solo el operativo al que aludió el senador Barreras, sino las directrices con las que han revivido los

“falsos positivos[6]”. Si este es el caso, entonces el Presidente debe nombrar a una persona que conozca el proceder de los militares, circunstancia que en doble vía garantice que los militares lo respeten y de manera concomitante sea capaz de exigirles transparencia en su proceder.

Y el segundo camino señala que, contrario al primero, Botero compartió desde su llegada a la cartera de la defensa, el proceder de una cúpula militar tropera, alejada del talante de la que logró conformar y dejar el entonces presidente Santos. Es decir, unos generales sensibles a la construcción de la paz, sin que ello signifique incapacidad para continuar operando en contra del ELN y de las otras estructuras hoy llamadas GAO (Grupos Armados Organizados).

El tercer asunto que dejó el debate contra el ministro de la Defensa tiene que ver justamente con el talante tropero de la actual cúpula militar. Después de firmado, ratificado y refrendado en el Congreso el Acuerdo de Paz de La Habana, el país esperaba que el espíritu pacifista y conciliador de los generales que acompañaron a Santos en la dura negociación política con las entonces Farc-Ep se extendiera en el tiempo. Pero no fue así. Bastó con el regreso[7] del uribismo al poder, para que nuevamente la doctrina de la seguridad nacional y el principio del enemigo interno guiara el proceder de las fuerzas armadas, o por lo menos, de aquellos sectores que jamás aceptaron la negociación con las Farc y mucho menos asintieron que a la mesa de La Habana llegaran militares activos a discutir asuntos técnicos relacionados con la entrega de armas y la disposición de las coordenadas para recoger el material de guerra escondido en caletas, entre otros asuntos castrenses.

El cuarto asunto se deriva del anterior, y permite señalar que si bien el debate de Moción de Censura era contra Botero, la petición de la renuncia se debe extender a la actual cúpula militar. Y la solicitud no solo se soporta en lo informado por el congresista Roy Barreras en torno al asesinato, vía bombardeo, de los 7 menores de edad, sino por los hechos que cobraron la vida del exguerrillero Dimar Torres[8], del líder campesino Flower Trompeta y por supuesto, por la reciente masacre ocurrida en el norte del Cauca, en la que murieron varios indígenas Nasa, entre estos la gobernadora Cristina Bautista.

Con todo lo anterior y más allá de si procede o no la Moción de Censura (segundo intento en contra del mismo Ministro), lo que queda claro es que hay un sector muy poderoso del establecimiento que quiere regresarnos a las aciagos años del conflicto armado interno, a través del incumplimiento de lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá y de la insistencia en ver como enemigos a indígenas, campesinos, afros, estudiantes, sindicalistas y profesores, entre otros.

De todo lo acontecido hasta el momento se debe hacer responsable el presidente Duque. Igualmente, de lo que en adelante ocurra en materia de violaciones de los derechos humanos y del DIH. Él, como jefe de Estado, debe zafarse del yugo de Uribe, y enderezar el camino. De lo contrario, la historia lo juzgará – y no se sabe si mañana un tribunal internacional- por hacer muy poco para proteger la vida y honra de los colombianos, en particular de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT).

Adenda: a la derrota[9] electoral sufrida en las elecciones del 27 de octubre, se debe sumar el debilitamiento del discurso de la seguridad democrática que acompaña al uribismo y al propio gobierno de Duque.

---

[1] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/196730

[2] Véase: https://www.sur.org.co/el-sindrome-del-enemigo-interno/

[3] Los casos de las madres-abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, cuyos hijos fueron arrebatados para entregárselos a militares.

[4] Véase el video: https://www.semana.com/nacion/articulo/en-su-momento-duque-califico-de-impecable-y-meticulosa-la-operacion-en-la-que-murieron-siete-ninos/639190

[5] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/si-hay-unos-ninos-en-el-campamento-de-un-terrorista-que-supone-uno-uribe-articulo-889755

[6] Véase: https://colombiaplural.com/falsos-positivos-la-jep/

[7] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0618/pdfs/4_Duque_y_el_regreso_de_un_ethos_pernicioso_insano_y_mafioso.pdf

[8] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/04/dimar-torres.html

[9] Véase: https://www.sur.org.co/el-declive-del-capataz/

Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Foto tomada de: Revista Semana